

El EPR, los intelectuales y la violencia en México*

MIGUEL ANGEL URREGO

La aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en el pasado mes de junio Aguas Blancas, estado de Guerrero, ha evidenciado la compleja relación de los intelectuales con el poder y las contradicciones de este sector en las sociedades latinoamericanas.

En México, como en otros países del continente, la intelectualidad vio caer los fundamentos que le permitían, salvo casos excepcionales, una cómoda postura en la sociedad. Tres "transformaciones del espíritu" han contribuido a cuestionar su oficio. En primer lugar, la creación del Partido Revolucionario Democrático (PRD), identificado como la izquierda mexicana, se hizo en torno a la fusión de algunos sectores de la izquierda histórica, como el Partido Socialista Unificado de México (PSUM)⁽¹⁾, dirigentes provenientes del gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PRI), como Cuauhtemoc Cárdenas, y personalidades del denominado centro. Así que, para mantener la unidad muchos han tenido que ceder sus antiguas posturas o

adoptar unas nuevas. El resultado es, por un lado, un desdibujamiento ideológico y, por otro, la existencia de un partido con muchas corrientes.

En segundo lugar, el salinismo⁽²⁾, y su promesa de llevar a México al primer mundo, arrastró a un importante número de intelectuales que plegaron algunas posiciones críticas, cuando las tenían, ante la idea de un salto vertiginoso a la modernidad económica, cultural y política. Un hecho importante en esta transformación es que antiguos militantes de izquierda, varios de ellos provenientes de la guerrilla y con experiencia en la clandestinidad, se convirtieron en voceros del salinismo y pronto ingresaron a la burocracia estatal, al punto que algunos son representantes oficiales en los diálogos de paz con el EZLN o son ideólogos de las reformas.

No obstante, cuando surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), estalla la crisis económica de diciembre de 1994, caen en la picota pública los hermanos Salinas de Gortari y se produce el asesinato del candidato

MIGUEL ANGEL URREGO, historiador, actualmente cursa estudios de doctorado en El Colegio de México

* Agradezco los comentarios y orientaciones de Javier Torres Parés, Luis Arturo Torres y Gonzalo Sánchez.

⁽¹⁾ El proceso de unificación de la izquierda mexicana se inició a finales de los 70. Durante el VI pleno del CC del Partido Comunista Mexicano (agosto de 1981) se aprobó la fusión con el PMT, PPM, PSR y MAUS y durante el XX congreso nacional (noviembre de 1981) se propuso el nombre de Partido Socialista Unificado de México a la Asamblea Nacional de Unificación.

⁽²⁾ Nos referimos al sector que sostuvo el proyecto neoliberal de Carlos Salinas de Gortari, anterior presidente de México.

presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio. La intelectualidad incorporada al salinismo ya no puede volver sobre sus pasos y debe mantenerse, con maromas ideológicas, al lado del poder.

La última transformación se produce en el contexto del auge de las posturas postmodernas y la crisis del socialismo real. Esto llevó a muchos al abandono de los temas ideológicos y políticos, en nombre del rechazo a los discursos hegemónicos y totalizantes, a la adopción de una temática novedosa: los estudios sobre la "cultura", y al establecimiento de un concepto neutro: la "sociedad civil".

El resultado inmediato de estas transformaciones fue una desbandada y una rápida adopción de posturas oficiales. Esta situación se percibió a raíz del surgimiento del EZLN y ahora se repite con el análisis que algunos intelectuales hacen de las acciones del EPR. Quizás uno de los temas que más ha polarizado a los intelectuales es la evaluación del EPR: su origen, estructuras y, especialmente, el uso de la violencia.

La primera acción pública del EPR -la toma del acto conmemorativo de la masacre de Aguas Blancas, el 28 de junio⁽⁵⁾- fue rechazada de inmediato por el dirigente del PRD, Cuauhtemoc Cárdenas. En ese momento anotó que el grupo era una "grotesca pantomima". El gobierno, por intermedio de la Secretaría de Gobernación, calificó a los encapuchados de una "pantomima" y de inmediato los ligó al narcotráfico y a bandas organizadas de la delincuencia común.

Algunos escritores hicieron abiertos señalamientos de complicidad de los organizadores del acto de Aguas Blancas con quienes hicieron la toma. Miguel Covián Pérez habló de

... la obvia connivencia de quienes organizaron el mitin de Aguas Blancas, amparados bajo el emblema del FAC-MLN -Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación

Nacional- con los sedicentes guerrilleros del EPR⁽⁴⁾

y de manera contundente sostuvo, a pesar del rechazo de los organizadores a tener vínculos con los insurgentes:

Las "personas involucradas" a que se refiere el boletín de la SG -Secretaría de Gobernación- y la PGR -Procuraduría General de la República- no pueden ser otras que los dirigentes del FAC-MLN⁽⁵⁾.

En la cacería de brujas que se desató contra todo tipo de organizaciones populares⁽⁶⁾ fueron apresados militantes del PRI muy cercanos al gobernador de Tabasco Roberto Madrazo. La acusación, entonces, contra el EPR fue la de ser miembros del sector de los "dinosaurios" del PRI y, por tanto, su único objetivo era desestabilizar el actual gobierno de Ernesto Zedillo. Afirmó Miguel Covián Pérez sobre los fines políticos del movimiento:

...o bien provocar un nuevo motivo de incertidumbre en el país, que repercuta en los mercados financieros, bursátiles y monetarios, como parte de la línea desestabilizadora que persisten en seguir los adversarios del gobierno del presidente Zedillo⁽⁷⁾.

La hipótesis del caos financiero ha sido cuestionada por los analistas económicos al demostrar que, en los últimos años, ninguno de los sucesos de "orden público", aparición del EZLN o EPR, ha tenido un impacto importante en la tasa de cambios.

Hasta ese momento se habían escuchado las posiciones más evidentes. Se resaltó el origen oscuro y delincencial de los insurgentes, la inexistencia de otros grupos guerrilleros en México, etc. Esta postura hacía eco de un análisis de inteligencia militar según el cual el EPR "está fuertemente relacionado con el narcotráfico y tendría el propósito de distraer al Ejército mexicano en su lucha contra las drogas"⁽⁸⁾.

⁽⁵⁾ La masacre hace referencia al asesinato de campesinos el 28 de junio de 1995. A pesar de existir un video que mostraba la forma como se asesinaba a los campesinos, el PRI logró que el gobernador de Guerrero -Rubén Figueroa- fuese declarado inocente y que no hubiera lugar para un juicio político o penal.

⁽⁴⁾ Diario *La Jornada*, 30 de junio de 1996, p. 9.

⁽⁵⁾ *Ibidem*.

⁽⁶⁾ El PRD, por ejemplo, denunció que sus diputados, senadores y dirigentes de Guerrero que asistieron al acto de Aguas Blancas serían citados a declarar bajo la acusación de tener nexos con el EPR. Diario *El Financiero*, 4 de octubre de 1996, p. 51.

⁽⁷⁾ *La Jornada*, 30 de junio de 1996, p. 9.

⁽⁸⁾ *La Jornada*, 1 de septiembre de 1996, p. 11.

Los gremios patronales, sectores de la Iglesia y miembros del gobierno pidieron tierra arrasada en Guerrero antes de que el grupúsculo se envalentonara. Así por ejemplo, la denominada Iniciativa Privada (IP) conminó al gobierno a "extirpar al EPR sin afectar a inocentes"⁽⁹⁾. Por su parte la CIA acompañó al Ejército de México peinando los estados de Guerrero, Oaxaca y México; la razón de esta participación, según Fausto Fernández Ponte, es la siguiente:

Pudiérese decir que, en este contexto, los agentes de inteligencia estadounidenses buscan hacer contacto con insurgentes por una simple y sencilla razón: el gobierno de México *no les suministra información confiable* acerca de la campaña -ciertamente extraordinaria, por su despliegue de efectivos y recursos- contra el EPR⁽¹⁰⁾.

Esta actividad de la central de inteligencia estuvo precedida por el ofrecimiento del embajador norteamericano en México, James Jones, de apoyo directo para combatir al grupo insurgente⁽¹¹⁾.

No obstante, la toma simultánea de poblaciones en seis estados del país evidenció que no se trataba de un grupo de carácter local sino de una fuerza político-militar con la pretensión de tener una presencia nacional. El saldo trágico de muertos y heridos, las declaraciones del presidente Zedillo según la cual el EPR era un grupo de "...criminales violentos, crueles asesinos, como ya quedó demostrado"⁽¹²⁾, razón por la cual serían tratados como criminales, y la postura de los comandantes del EPR, en el sentido de inclinarse por una salida militar, puso en la mesa del debate, nuevamente, el tema de la violencia política en México.

Sobre la evaluación de la violencia guerrillera se pueden distinguir cuatro posiciones entre los intelectuales mexicanos. La primera es la de los recién vinculados al salinismo y al Estado. Ellos, casi sin excepciones, llamaron a una pronta y

rápida solución del tema EPR, solución que debe entenderse como una política de tierra arrasada. Los argumentos básicos de este sector son: la pobreza no constituye razón para el alzamiento, el grupo representa posturas "setenteras" alejadas de la realidad, se pueden calificar de delincuentes y debe aplicarse una rápida solución militar.

Sobre el particular señalará Héctor Aguilar Camín:

Lo que demuestran abundantemente los movimientos guerrilleros de las últimas décadas es que siempre pesaron más en ellos la convicción ideológica y la voluntad política de pequeños grupos, a menudo impulsados desde una capital solidaria, como la Cuba revolucionaria, que las condiciones sociales y económicas del territorio en que se querían implantar. Más aún: lo habitual en esos grupos fue no reparar demasiado en las condiciones socio-económicas de sus focos elegidos, sino anteponer a toda adversidad la voluntad de implantación, según puede verse clásicamente en la aventura del Che en Bolivia⁽¹³⁾.

En un sentido similar se pronunció Gustavo Hilares, antiguo dirigente del movimiento guerrillero Liga 23 de Septiembre, al responder al dirigente del PAN, Carlos Castillo Peraza, que la violencia de los "justos" es irresponsable e insensata y que México había cambiado, al punto que el tratamiento a la guerrilla es distinto hoy, por ello se explica que no la hayan arrasado⁽¹⁴⁾.

Por su parte Jorge Alcocer V. resaltó su acuerdo con el presidente Zedillo respecto a la forma de enfrentar al EPR⁽¹⁵⁾.

Un segundo grupo de intelectuales, con sectores a su interior, descalificaron de plano el uso de la violencia como alternativa política y rechazaron los argumentos de que la miseria, la pobreza y la represión justificaba el uso de la armas. Carlos Monsiváis sostuvo:

Pero ninguna causa, por urgente que sea, vuelve admisible la intolerancia, las provo-

⁽⁹⁾ La Iniciativa Privada canaliza la expresión del sector empresarial de México. *La Jornada*, 12 de septiembre de 1996, p. 1.

⁽¹⁰⁾ *El Financiero*, 4 de octubre de 1996, p. 55. El subrayado es del original.

⁽¹¹⁾ *La Jornada*, 10 de septiembre de 1996, p. 1.

⁽¹²⁾ *La Jornada*, 31 de agosto de 1996, p. 3.

⁽¹³⁾ *La Jornada*, 9 de septiembre de 1996, p. 1.

⁽¹⁴⁾ *Revista Proceso*, No 1053, 18 de agosto de 1996, p. 31.

⁽¹⁵⁾ *Proceso*, No 1037, 15 de septiembre de 1996, p. 45.

caciones y el desprecio por la vida humana. Si se quiere modificar el rumbo del país, optar por el enfrentamiento a como dé lugar es agravar sin límite la situación...⁽¹⁶⁾

Sin embargo su llamado a la mesura y la concordia está seguido por un planteamiento maniqueo y sectario. En efecto, el mismo Monsiváis niega la posibilidad de otra posición cuando sostiene:

En estos días, y salvo excepciones previsibles de fanáticos de línea dura, se llega a un consenso amplísimo en torno a esta irrupción armada: rechazo de los delitos cometidos a nombre de una "revolución fantasmal"...⁽¹⁷⁾

Lo interesante de esta postura es que el término utilizado para calificar los actos del EPR es el de "delitos", por eso es evidente que Monsiváis insista en la aplicación de la ley. Nos surge una pregunta: ¿es la misma ley de Zedillo y del sector empresarial?

En un artículo de respaldo a Monsiváis, José Woldenberg⁽¹⁸⁾, sin mayor rigor intelectual, toma tres ejemplos para reflexionar sobre la violencia (un hombre desempleado, sin recursos y con una señora "insoporable" a quien le pega; el linchamiento por la población de un violador que había ultrajado y asesinado a una mujer; las acciones del EPR). Luego de hacer un llamado a la necesidad del análisis del contexto en el cual viven los hombres y las mujeres - que no lo cumple- pasa al "juicio de valor que nos merecen esas acciones"⁽¹⁹⁾ con lo cual concluye que "no existen correlaciones lineales ni mecánicas ni simples entre condiciones sociales y conductas"⁽²⁰⁾. La conclusión de Woldenberg, en nombre de una dimensión ética, es evidente: las acciones del EPR no se pueden justificar.

Otros escritores, basados en su rechazo a la violencia, optaron por retomar una diferencia

establecida por el gobierno entre el EZLN (guerrilla buena) y el EPR (guerrilla mala) y destacar que el EPR, a diferencia del EZLN, no tiene base social y se negaron a otorgar la más mínima legitimidad al nuevo movimiento insurgente. Miguel Covián Pérez concluye categóricamente:

No tendría autoridad moral para mirar a la cara a mis hijos, si por abstraerme en disquisiciones socio-políticas me involucrase en la defensa involuntaria de bandas criminales y pérdidas contra México y su pueblo⁽²¹⁾.

Finalmente, algunos intelectuales se inclinaron por la aceleración de las reformas políticas. Para ellos, las confrontaciones ideológicas deben darse en el terreno de la democracia. Adolfo Gilly parte -a nuestro juicio con razón pero faltándole mayor análisis- de separarse del uso de las armas para reflexionar sobre el tema:

Para tomar una posición sobre el Ejército Popular Revolucionario no me parece adecuado poner en primer lugar la cuestión de las armas o de la violencia. A un movimiento político -y el EPR lo es- se lo juzga ante todo por su programa, su política y sus métodos. El uso de las armas por sí mismo no legitima ni deslegitima a nadie. Si sólo se emplea este criterio, lo que se escuchará, a favor o en contra, no pasarán de ser juicios morales⁽²²⁾.

A renglón seguido Gilly rechaza la presencia del EPR al sostener que: "Los métodos del EPR son verticales y militaristas... Nada tienen que ver esas prácticas con los ideales del socialismo o de la democracia, cualquier adjetivo se le ponga a ésta"⁽²³⁾. Sin embargo, introduce un elemento no considerado por los intelectuales comentados anteriormente: la "descomposición del régimen estatal"; por ello, haciendo un recuento de las confrontaciones entre las

⁽¹⁶⁾ *La Jornada*, 31 de agosto de 1996, p. 8.

⁽¹⁷⁾ *Ibidem*.

⁽¹⁸⁾ José Woldenberg fue nombrado, el pasado 31 de octubre, como director del Instituto Federal Electoral (IFE), lo acompañan, como consejeros, reconocidos intelectuales. El nombramiento de los nuevos responsables del IFE se produjo a partir de un acuerdo político entre el PRD, el PAN, el PRI y el PT y que además fue respaldado por el gobierno.

⁽¹⁹⁾ *La Jornada*, 14 de septiembre de 1996, p. 5.

⁽²⁰⁾ *Ibidem*.

⁽²¹⁾ *La Jornada*, 1 de septiembre de 1996, p. 11.

⁽²²⁾ *Ibidem*, p 1 y 12.

⁽²³⁾ *Ibidem*.

fracciones del PRI –a las que llama “bandas”– y de otros sucesos políticos desde 1988, sostendrá: “la crisis prolongada y sin salida del régimen estatal es el mayor gérmen de violencia en el territorio nacional”. Gilly reclama una salida de fondo:

Sólo una elección clara, con padrón confiable y reglas simples, aceptada por todos, cualquiera que sea su resultado, puede ser el paso fundador hacia la conquista de una nueva legitimidad republicana y un nuevo pacto constitucional⁽²⁴⁾.

Dentro de este sector también se pueden ubicar a los intelectuales que sirven de asesores al EZLN. Lo particular es que su ciega defensa del EZLN –que se expresa en un culto desmedido y sin fundamento político a la figura del subcomandante Marcos– los ha imposibilitado de hacer un balance y a lo sumo se han limitado a señalar las virtudes de los antiguos análisis del EZLN sobre la situación mexicana. Dentro del sector que recientemente han llamado a un diálogo político con el nuevo grupo insurgente está Cuauhtemoc Cárdenas⁽²⁵⁾ y la CONAI –Comisión Nacional de Intermediación– del sacerdote Samuel Ruiz⁽²⁶⁾.

El tercer grupo de intelectuales se inclinó por un análisis más detallado de la situación mexicana, por una postura más crítica del salinismo y sus efectos y una actitud más abierta en la polémica de los intelectuales. Sergio Zermeño inicia su reflexión con dudas sobre la posibilidad de negar de plano los argumentos del EPR: “¿Cómo desmontarle a los miembros del EPR que no tienen razón cuando afirman que este es un gobierno favorable a los grupos más ricos del país y al capital financiero nacional y transnacional?”⁽²⁷⁾ Sobre la inclinación por la vía armada argumentará:

Decidirse por la violencia para cambiar las cosas en favor de las mayorías no depende, entonces, de que una causa sea muy justa como

la del EPR, sino de una buena evaluación (aunque siempre deficiente), de los elementos favorables y desfavorables para el logro del objetivo propuesto⁽²⁸⁾.

Lo máximo que llega a cuestionar al grupo insurgente es su radicalismo, es decir, contar con una causa justa “pero no contar con una buena metodología para aplicarla”. Finalmente, Zermeño introduce la variable del grupo en el poder para analizar, justamente, la situación de la violencia:

Esos radicales guerrilleros que han aparecido en Guerrero, Hidalgo y Chiapas aún no han causado la muerte de la sociedad. Pero los otros radicales, los que fueron a Harvard y a Yale y aprendieron su “verdad”... sí han provocado (con su radicalismo, con su afán ciego por aplicar a cualquier precio sus fórmulas simplonas, su verdad) la muerte de sus congéneres, la muerte de la sociedad⁽²⁹⁾.

Pablo Gómez es más punzante con los intelectuales que rechazan de plano al EPR. Gómez comienza su artículo “Exhorto a las armas” con el siguiente comentario:

Las hipócritas condenas a todo movimiento armado, por el hecho de serlo y nada más, contienen solamente un exhorto al uso de las armas con tal que éstas sean del poder y nunca de los rebeldes. La pretensión de que la violencia que no proviene de la autoridad constituida es contraria a la ética, denota ignorancia supina de la historia y convierte a sus autores en idólatras del estado de cosas, cualquiera que sea éste⁽³⁰⁾.

Posteriormente retoma el ejemplo de la Independencia, en la que el clero insurgente llamó a “matar gachupines” –españoles– para señalar cómo la violencia utilizada contra la tiranía se ha convertido en institución.

La postura de los intelectuales que no realizan un análisis histórico de la violencia es igualmente cuestionada. Sostendrá Gómez:

⁽²⁴⁾ Ibidem.

⁽²⁵⁾ *La Jornada*, 6 de septiembre de 1996, p. 1.

⁽²⁶⁾ *La Jornada*, 13 de septiembre de 1996, p. 1. La CONAI se establece para promover los diálogos de paz entre el EZLN y el gobierno. Es de anotar que los opositores al sacerdote Samuel Ruiz señalan que la CONAI es juez y parte en diálogos, pues, argumentan que es evidente su nexo con los zapatistas.

⁽²⁷⁾ *La Jornada*, 30 de agosto de 1996, p. 7.

⁽²⁸⁾ Ibidem.

⁽²⁹⁾ Ibidem.

⁽³⁰⁾ Ibidem, p. 1 y 5.

El discurso de los intelectuales éticos no pretende otra cosa que dar cobertura a la acción armada contra los guerrilleros y sus presuntos cómplices, aún sin detenerse a esclarecer nada al respecto ni analizar las posibilidades de un diálogo pacífico⁽⁵¹⁾.

No es que Gómez esté con la opción de la violencia y por ello se deslinda del EPR: "Hoy y aquí, el uso de la forma de lucha armada es inadecuado y, además, promueve las tendencias más represivas y violencias ya existentes dentro del poder"⁽⁵²⁾.

Daniel Cazés, luego de rechazar la militarización del país, introduce un argumento nuevo en la polémica: la cultura política en México se basa en el principio de la obligación ética del alzamiento ante la opresión. Esta sería la herencia de una Revolución institucionalizada por el Estado, como parte de la formación de la identidad nacional, y por el PRI, como parte de su programa político.

Así mismo cuestiona Cazés la idea de que la ausencia de grupos insurgentes supone la paz, máxime con los asesinatos de Estado (Colosio) y la existencia de mil quinientos grupos armados de delincuentes. Por lo mismo rechaza que "...a la corrupción y la impunidad ancestrales y con futuro brillante se le llame Estado de derecho"⁽⁵³⁾.

Finalmente, Eduardo Montes parte del reconocimiento de que no se puede crear, de la noche a la mañana, una guerrilla. "El EPR, así como el EZLN, son consecuencia de causas sociales y políticas semejantes"⁽⁵⁴⁾. Y más adelante:

Ningún grupo guerrillero nace si no existen condiciones económicas, políticas, morales para ese nacimiento... No puede nacer ni sostenerse tampoco si no tiene una base social⁽⁵⁵⁾.

Con este argumento descalifica a los intelectuales que han decidido optar por evaluar al grupo insurgente como salido de la voluntad de algunos pocos y de la imposición a la sociedad de una salida violenta. Sin embargo, como otros, Montes ve con preocupación que la irrupción del EPR pueda alimentar las posiciones más radicales dentro del gobierno, por ello hace un llamado a la sociedad:

La alternativa es que la sociedad, como lo hizo en 1994 cuando apareció el EZLN, intervenga para obligar al gobierno y al EPR a buscar caminos políticos para llegar, lo más pronto posible y con el menor costo en vidas y sufrimientos, a una mesa de negociaciones⁽⁵⁶⁾.

El cuarto grupo de intelectuales, los postmodernos, guardaron silencio.

⁽⁵¹⁾ Ibidem.

⁽⁵²⁾ Ibidem.

⁽⁵³⁾ *La Jornada*, 31 de agosto de 1996, p. 9.

⁽⁵⁴⁾ Ibidem, p. 11.

⁽⁵⁵⁾ Ibidem.

⁽⁵⁶⁾ Ibidem.